



Eder Jair Sánchez

Representante de la Asociación Departamental de Campesinos del Putumayo, ANUC-Putumayo

Ante la desocupación de hecho del Putumayo: resistencia

Para iniciar mi exposición quiero contextualizar brevemente el Putumayo. Su extensión es de 25.000 km², donde habitan 378.000 personas y donde, pese a la agudización del conflicto armado, el 60% de su población vive aún en el sector rural. Nuestro departamento tiene trece municipios, de éstos hay cultivos de coca en nueve. Hasta el año 2000 se decía que el departamento sembraba cerca del 50% del total de la cosecha existente en el país (140.000 hectáreas). Hoy se dice por parte del gobierno nacional que sólo quedan 4.000 hectáreas.

Según la proyección del DANE para el año 2005 los habitantes de cada municipio son:

n°	Municipios	Total	Cabecera Municipal
1	Puerto Asís	69.851	29.775
2	Orito	43.812	13.704
3	Valle del Guamuéz	39.161	9.966
4	Mocoa	37.135	22.009
5	Puerto Guzmán	35.868	4.093
6	Puerto Leguizamo	35.010	9.094
7	Villa Garzón	30.899	7.012
8	San Miguel	24.950	7.183
9	Puerto Caicedo	19.479	3.226
10	Sibundoy	15.490	9.455
11	Santiago	12.612	2.714
12	San Francisco	8.604	4.349
13	Colón	5.919	3.266
		378.790	125.846

Nota: En los cuatro municipios resaltados no hay cultivos de coca.

En el Putumayo habitan 12 pueblos indígenas y dos importantes asentamientos Afroputumayenses. Desde el año 2000, con la implementación del Plan Colombia, se firmaron 33 pactos sociales (37.000 familias) y dos acuerdos con las comunidades indígenas (6.000 familias), uno con el pueblo Kofán y otro con los 11 pueblos restantes. Hoy, después de haber evaluado esta inversión (800 mil millones), se concluye que el desarrollo alternativo, al igual que la fumigación de los cultivos de coca impuesto por EEUU, ha fracasado.

Dado que la población no es conciente de la propia realidad que vive o no tiene claridad política sobre la globalización no ha percibido que el territorio está siendo desocupado lentamente. Sólo basta mirar las cifras oficiales -teniendo claro que es un registro inferior- sobre el número de desplazados. Desde la implementación del Plan Colombia en el año 2000 hasta 2005 se han registrado cerca de 38.000 desplazados internos. Esto sin contar los que han salido a otros departamentos ni los que se han refugiado en el Ecuador, que suman más de 50.000 personas. Además, de las 37 mil familias que dependían del cultivo de coca en el año 2000, sólo quedan, aproximadamente, unas 15 mil familias.

Es necesario también hablar del confinamiento, que significa que no se permite que la comunidad se mueva, una especie de secuestro por parte de la guerrilla. Se ha convertido quizá en estrategia de resistencia teniendo en cuenta que esta situación se presenta cuando hay acciones militares representadas en paros armados o enfrentamientos, lo que hace que se preserve en principio la vida, dado que si alguien se expone o no acata tal decisión lo más probable es que

MESA 2

La voz de las comunidades desplazadas/confinadas: situación y alternativas



“De las 37 mil familias que dependían del cultivo de coca en el año 2000, sólo quedan, aproximadamente, unas 15 mil familias”

sea un desplazado más o termine siendo señalado por parte del ejército o los paramilitares como colaborador de la subversión.

Esta situación de violencia y pobreza en la que vivimos hace necesario tener claridad política sobre los intereses económicos que existen sobre nuestro territorio por parte de las potencias del mundo en los aspectos que siguen a continuación.

El primero es el de las multinacionales. El departamento del Putumayo es una zona de gran riqueza natural, con una gran biodiversidad, así como fuentes de agua. Por otro lado, se encuentra en una ubicación estratégica. Éstos son hechos corroborados por estudios de organismos nacionales e internacionales (Corpoamazonia y FAO), donde se señala que la Amazonia puede albergar entre el 30 y el 50% de las especies existentes en el mundo:

La FAO (1990) estima que la Amazonia puede albergar entre el 30% y el 50% de las especies de organismos existentes en el mundo, incluyendo unas 60.000 especies de plantas superiores. Asimismo, el mosaico de vegetación que sustituye el hábitat de la fauna amazónica varía en función del relieve, los suelos, el nivel y la duración de inundaciones, la creciente intervención humana, etc. La superficie deforestada de la selva amazónica se estima en un millón de km²

De acuerdo con McNeely et al. (1990): “Los países amazónicos figuran entre los de mayor biodiversidad a escala mundial. Brasil posee el mayor número de especies, ante todo por su gran extensión, mientras que la gran riqueza de especies y alto grado de endemismo de Colombia, Ecuador y Perú se debe al efecto aditivo de la fauna de la Amazonia, de los Andes y de la vertiente del Pacífico”.

Varios trabajos de investigación básica orientados a identificar la diversidad faunística de la Amazonia colombiana han sido desarrollados, tanto por institutos de investigación como por centros de educación superior, cuyos resultados han contribuido a cuantificar el

número de especies presentes en la región. Desafortunadamente, algunas de estas investigaciones no tuvieron como propósito el establecer planes de ordenación y manejo de estos recursos, quedando reducidos a simples listados de especies identificadas en un momento y espacio específico.

En términos generales para Colombia y en particular para la Amazonia colombiana se reporta el siguiente número de especies de vertebrados.

CUADRO COMPARATIVO DE LA DIVERSIDAD FAUNÍSTICA DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

clase	n° especies para colombia	n° de especies para la amazonia
anfibios	507	95
reptiles	475	147
aves	1.752	868
mamíferos	367	210

El segundo interés tiene que ver con el petróleo y los minerales. Mirando aquí un inventario en este mismo documento, se encuentra la certificación que en nueve municipios del Putumayo hay petróleo. De ahí uno puede entender por qué no ha sido posible la titulación, por qué sigue negándose el derecho a la tierra (el Plan Colombia, en el año 2000 se propuso como meta para 2005 entregar 5.000 títulos. Hoy no ha llegado ni al 20%). Pero hay cosas que, quizás por no tener acceso a la información, es importante aclarar.

La actividad minera está representada principalmente por la explotación de 120 pozos petroleros¹, cuya producción ha disminuido por diversas circunstancias, pasando de 120.000 barriles al día en los años setenta a 13.500 barriles al día en los años noventa; en diciembre de 2000, fue de apenas 8.000 barriles al día. Se presentan manifestaciones y yacimientos de oro de veta y aluvión en las formaciones geológicas del denominado Macizo Colombiano, especialmente en la cordillera Centro-Oriental

Aquí es donde debe reflexionarse con mucho cuidado acerca de los intereses económicos fijados en la región, so pretexto de erradicar los cultivos de coca y, con ello, la aplicación de la política antiterrorista (Plan Patriota), se beneficia al interés de las multinacionales para extraer minerales preciosos, como el oro, que se

1. Informe de Coyuntura Económica Regional. Banco de la República. 2000

puede encontrar en la mayoría de los municipios. También hay yacimientos de minerales no metálicos como calcio, cobalto, estaño, molibdeno, titanio y tungsteno. Volviendo al petróleo, cabe destacar que se halla en nueve de los 13 municipios: Mocoa, Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, Leguizamo, Orito, Valle del Guamuéz y San Miguel:

RECURSOS MINERALES POTENCIALES EN EL SUR DE LA AMAZONIA

Recursos Putumayo

MINERALES PRECIOSOS	
oro	Mocoa, Puerto Guzman, Colon, Puerto Caicedo
MINERALES METÁLICOS	
cadmio	Mocoa (prospecto)
cobalto	Mocoa (prospecto)
cobre	Mocoa, Santiago
estaño	Mocoa, Leguizamo
molibdeno	Mocoa (yacimiento)
titanio	Mocoa, san francisco
tungsteno	Mocoa (ocurrencia)
MINERALES NO METÁLICOS	
caliza	San Francisco
diatomitas	Santiago (manifestacion)
evaporitas	Mocoa
mica	Sibundoy (manifestacion)
petróleo	Mocoa, Puerto Guzmán, Orito, Villagarzon, Puerto Asis, San Miguel, Valle del Guamuéz, Leguizamo
mármol	San Francisco

Todo esto está en el Putumayo. Se dice que China está interesada en la explotación minera, mas sin embargo ya hay compañías de EEUU y Canadá desde el 2004 iniciando la explotación de petróleo.

El tercer interés son los megaproyectos que quieren implementarse en nuestro departamento. Hay uno que ya arrancó. Éste se encuentra en un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es el famoso proyecto Corredor Intermodal Tumaco, Puerto Asís, Belén Do Pará, que comienza en Tumaco, pasa por Mocoa Y Puerto Asís y llega a Brasil, pasa por Manaus y termina en Belén, en el Atlántico. Es un proyecto que ya está caminando pero, debido a todo el proceso de resistencia de las comunidades indígenas, campesinas y afrocolom-

bianas, su avance es lento. Con todo, consideramos que se agilizará, debido a los intereses que se crean con la firma del TLC y el plan 2019, cosa que hace preveer que la situación se volverá más tensa y más difícil en el departamento.

El cuarto interés tiene que ver con la ubicación en la zona de frontera. Tenemos frontera con Ecuador y Perú. Bajando por el río Putumayo nos conectaremos con el Amazonas y, por ende, con Brasil, constituyéndonos en una ruta importante para el comercio y complementaria al megaproyecto del Corredor Intermodal.

La situación del departamento no es nada nueva independientemente del Plan Colombia. Hay antecedentes que han motivado que se quiera desocupar el departamento.

Brevemente enumeraré a continuación algunas fechas que consideramos importantes para explicar el por qué de la desocupación.

Entre los años 50 y los 70, la región fue colonizada como parte de una fallida política de reforma agraria. En los años ochenta, el Estado sumió a sus habitantes en un abandono total, sin ningún tipo de inversión social, sumidos en la más completa pobreza y miseria. Paralelamente al desespere del campesino para poder sobrevivir, se inician los cultivos de coca y se genera una alianza con la subversión que finalmente se convierte en una bonanza para mitigar la pobreza y fortalecer el control del territorio.

En los años noventa, se inicia la política antidroga, ya que por primera vez se detectan a gran escala los cultivos de coca. Es a partir de aquí cuando se diseña la política de desocupación con la fumigación aérea indiscriminada de los cultivos de coca.

En 1996, después de las marchas campesinas, se reinicia el proyecto paramilitar, el cual debilitó de manera contundente el movimiento social y se dan los primeros desplazamientos masivos, y por ende la desocupación.

En el año 2000 se comienza a implementar el Plan Colombia en el Putumayo y, con él, una guerra contra los insurgentes, debido a la presencia de las FARC. Igualmente, frente al garrote viene la zanahoria, que son los pactos sociales; los cuales, hoy, después de 5 años, fracasaron.

Entre 2001 y 2004 -para consolidar un poco el proyecto imperialista antiterrorista acompañado de su supuesta inversión social- y por primera vez, los Estados Unidos,



también con zanahoria, implementan los *programas pil-daet*, que consisten en focalizar ciertas zonas para implementar proyectos de desarrollo alternativo. Se ha demostrado que estos programas no fueron sostenibles y que su fracaso hoy es evidente.

En el 2005 se inicia el Plan Patriota que, so pretexto de capturar vivos o muertos a los miembros del secretariado de las FARC, inicia una fase de militarización sin precedentes.

En conclusión, en los cinco últimos años se han implementado paralelamente a la militarización, fumigación y programas de desarrollo alternativo. Y todos sabemos que han sido asistenciales. Ahora, el 27 de abril de 2006, se instaló la segunda fase del Plan Colombia.

¿Qué ha dicho el gobierno en cuanto a toda esta situación del departamento? Digamos que ha querido presentarse como un inicio de la prosperidad en el Putumayo. Se habla que más de 800 mil millones de pesos han llegado al departamento desde que se inició el Plan Colombia, destinados a la inversión social. Que por primera vez el Estado ha hecho acto de presencia y esta presencia la refleja en su pie de fuerza. En este momento, en los trece municipios del Putumayo hay policía, cuando hasta hace tres años existía sólo en la mitad.

Dice el gobierno que implementó lo de los soldados campesinos. En los municipios más violentos hay bases de soldados campesinos. Asimismo, el gobierno ha manifestado que se han reducido los cultivos de coca, el Ministro del Interior anterior tuvo la osadía de decir que allá ya no había ninguna mata de coca. Es verdad que se han reducido, digamos, en un 60%, porque de las 66.000 hectáreas iniciales, Naciones Unidas ha manifestado que hoy sólo existen 4.000 hectáreas, pero nosotros sabemos que eso no es cierto. Incluso la fotografía satelital ha revelado que en los países fronterizos empiezan a incrementarse los cultivos. Simplemente lo que se ha hecho es desplazar los cultivos, en especial

“La situación del departamento no es nada nueva independientemente del Plan Colombia. Hay antecedentes que han motivado que se quiera desocupar el departamento”

hacia el Ecuador, la zona fronteriza con el Perú y Bolivia y a los departamentos vecinos, sobretudo Nariño, en la zona de Lorente. El informe de prensa *El Tiempo*, del sábado 15 de abril, nos da la razón después de 5 años, ya que en ese informe se detalla que el departamento de Estado de los Estados Unidos reconoce que los cultivos de coca se han incrementado en otras zonas.

El gobierno ha manifestado que las FARC se financian con la producción y el comercio de la coca. La lógica, diría que el accionar debió haber terminado porque si ya no hubiera coca significaría que en este momento no habría guerrilla y no habría paramilitares. Bueno, éstos ya se *desmovilizaron*. Entonces se concluiría que estamos en un remanso de paz, empero no es cierto.

Asimismo, el gobierno ha manifestado en su propuesta que los desplazados regresarán a sus parcelas y que, si no tienen tierra, con la extinción del dominio y con la propuesta de retorno, todo volverá a ser normal. Lo cual tampoco es cierto.

Lo que ha pretendido decir el gobierno es que la situación ha mejorado, pero sabemos que no es así porque nuestra realidad nos muestra la agudización del conflicto armado y la manera como se han hecho los procesos de resistencia en cada uno de los municipios. Para que la gente entienda cuáles son los intereses en el departamento. Sabemos. Y ésa es una paradoja; que en la medida en que ha aumentado el pie de fuerza militar, han aumentado los desplazados y los homicidios con violencia.

El paramilitarismo, que se pensaba que con la desmovilización mermaría su actividad, sigue teniendo presencia en nueve cabeceras municipales. La guerrilla ha incrementado su acción militar. Entre 2005 y lo corrido del 2006 han decretado 3 paros armados, teniendo como objetivo la quema de carros, en su mayoría para el transporte público y otros carros que transportan petróleo. Han destruido también la infraestructura social, como puentes. Se han hecho atentados contra las torres de energía eléctrica, voladuras del oleoducto trasandino y de pozos de petróleo en la zona del Tetey.

Con la fumigación la situación es crítica. En el aspecto social han sido afectados principalmente los niños y uno de los efectos más graves ha sido el desplazamiento. Por eso los registros han aumentado; se habla de casos de muerte y de malformaciones congénitas y abortos. Uno de los más importantes estudios sobre los efectos de la fumigación fue el realizado por organizaciones sociales de Ecuador, denominado “Impactos en Ecuador de las fumigaciones realizadas en el Putumayo dentro

del Plan Colombia”, de octubre de 2002, donde concluye lo siguiente:

1. Contrariamente a las afirmaciones de falta de evidencias, podemos afirmar que las fumigaciones tienen severos impactos sobre los ecosistemas, sobre los medios de subsistencia de las poblaciones y sobre su salud, no solamente en Colombia, sino también en Ecuador

2. Los resultados encontrados en los análisis de sangre concluyen que la población del cordón fronterizo, por sus niveles de afectación cromosómica, está expuesta a un mayor riesgo de padecer mutaciones y malformaciones congénitas.

3. Las fumigaciones han generado daños masivos en los cultivos, suelos y efectos en la salud de la población y alteraciones sociales en las comunidades que han sido afectadas.

4. Las autoridades colombianas no están respetando la franja de seguridad demandada por el gobierno ecuatoriano. No sólo se está fumigando dentro de los 10 km solicitados de protección, sino directamente sobre las riveras del Río San Miguel, límite norte de la frontera con Colombia.

5. Las fumigaciones están demostrando ser ineficientes en la eliminación de cultivos ilícitos y determinantes en el desplazamiento de las poblaciones.

6. Es urgente insistir en la erradicación manual de cultivos de uso ilícito en la zona de frontera.

7. Las fumigaciones constituyen una violación a los derechos sociales, económicos y culturales de la población afectada y, especialmente, vulneran los derechos de los pueblos indígenas amazónicos, dada su estrecha relación entre territorio y supervivencia cultural.

8. Las afectaciones observadas permiten afirmar que en las zonas visitadas se vive una crisis alimentaria derivada de la destrucción de los cultivos de subsistencia y de la cría de animales.

9. La ausencia de monitoreo de los impactos de las fumigaciones en la frontera incide en la legitimidad del Estado y vulnera las condiciones de gobernabilidad en la zona, lo que redundará en la vigencia del respeto a los derechos humanos.

En lo económico, acabaron con los pocos cultivos de pan coger o de seguridad alimentaria, y el gobierno

“En el 2005 se inicia el Plan Patriota que, so pretexto de capturar vivos o muertos a los miembros del secretariado de las FARC, inicia una fase de militarización sin precedentes”

señaló que era porque había cultivos intercalados. Curiosamente, los mismos programas que financió el gobierno fueron fumigados; específicamente los cultivos de palmito (más de sesenta hectáreas de palmito). La situación de los palmicultores es de miseria. Toda la plata se ha quedado en burocracia y en propaganda.

En lo ambiental, las fuentes de agua fueron muy contaminadas. En lo cultural, hay comunidades indígenas que están en proceso de extinción, en especial las que están en la frontera con el Ecuador. Algunas de ellas se han salvado porque se han ido a ese país. Más de 7.000 quejas se han presentado por la fumigación de cultivos de pan coger afectados y hasta este momento ninguna indemnización ha prosperado, a pesar de que la Defensoría del Pueblo emitió una resolución, la cual no ha tenido efectos. Además, la resolución es inaplicable porque dice que la verificación tiene que hacerse en tierra, salvo que haya problemas de orden público. Pero la situación es que todo el Putumayo tiene problemas de orden público. Entonces, jamás se daría esta verificación.

Frente a la afirmación que la situación de seguridad ha mejorado sólo cabe decir que no es cierto. En el año anterior se registraron oficialmente, según datos de la Policía Nacional, 500 homicidios. Es ahí donde no encontramos la lógica. Del mismo modo, según Acción Social, hasta diciembre del 2005 se han registrado 38.000 personas desplazadas y, de acuerdo con un promedio que hemos hecho, están desplazándose 500 personas mensualmente. Aquí se ha generado el primer hecho de resistencia a través de las organizaciones sociales. Les hemos dicho que no salgamos del Putumayo, por eso hoy estas 30.000 personas están desplazadas aunque no han salido del departamento, se han movido de un municipio a otro, especialmente a la capital, que es Mocoa.

Pasa el tiempo y todo es mentira y engaño. En las marchas campesinas de 1996 (que fue una muestra importante de movilización) se hicieron dos compromisos principales: las vías de la red terciaria, que siguen sin



“Los mismos programas que financió el gobierno fueron fumigados. La situación de los palmicultores es de miseria. Toda la plata se ha quedado en burocracia y en propaganda”

hacerse, y la electrificación en la fase cuatro. El 90% de las veredas siguen sin electrificación.

Por último, ¿qué vamos a hacer como procesos de resistencia? Primero, seguir manifestando la importancia de nuestro territorio, dados los intereses económicos, insistiendo en que la gente no salga del departamento. Hemos hecho contactos importantes con las ONG de derechos humanos. Gracias a su presencia, de alguna manera el conflicto ha bajado y se han evitado muchas masacres. Igualmente, delegados de la comunidad internacional, a comienzos del Plan Colombia, realizaron visitas al departamento, que de alguna manera hicieron que la situación de violencia no fuera peor.

Otro de los pasos ha sido la creación de una coordinación con todas las organizaciones sociales, en cabeza de Pastoral Social, de la Organización Zonal Indígena del Putumayo, (OZIP), de la asociación de Productores, de los firmantes de pactos sociales y de la Asociación de Educadores. Con todos ellos hemos creado una red para salvaguardar nuestras vidas y seguir ejerciendo esta resistencia.

A muchos compañeros se los ha llevado el ejército, la guerrilla o los paramilitares pero hemos logrado a través de acciones colectivas ir 20 ó 30 líderes y hemos logrado rescatarlos. Hemos dicho que si les van a hacer un juicio que lo hagan acorde a la legalidad y con ello hemos logrado que nos los devuelvan.

Desde el año pasado estamos trabajando en la posibilidad de realizar diálogos regionales en el Putumayo y creemos que son posibles. Sin embargo, nos hace falta más articulación. Para concretar el proceso seguiremos insistiendo en la claridad política frente a lo que sucede en el departamento.

En cuanto a cómo estamos organizados, nuestro esquema de estructura se asimila a una junta de acción comunal pero hemos dejado espacios abiertos donde las organizaciones sociales diferentes a la nuestra se puedan fortalecer. Por ejemplo, en el municipio de

Puerto Caicedo es donde se ha desarrollado más el trabajo de las mujeres y las hemos animado para que ellas lo lideren, y nosotros hemos ayudado más a definir acciones en conjunto.

¿Cómo hemos logrado quedarnos aún en el departamento? Hemos hecho eventos de bajo perfil, hemos tratado de cuidar a nuestros dirigentes y hemos definido ejes temáticos para que cada uno de ellos sea desarrollado mediante cualificación de líderes. Nuestro principal trabajo lo hemos enfocado hacia una propuesta de desarrollo regional, fundamentado en el mandato agrario, en temas como la seguridad y la soberanía alimentaria, la economía campesina, la tierra como un derecho fundamental y el agua como un derecho intransferible.

Nosotros, los habitantes del campo, un poco para mantenernos informados de la situación y para darnos seguridad por nosotros mismos, hemos establecido una capacitación para el manejo de Internet, adquirimos celulares. Por Internet comunicamos cosas importantes en la medida en que se nos ha manifestado que tenemos situaciones preocupantes de seguridad. A veces no nos desplazamos a ciertas zonas. Igualmente, cada vez que hacemos eventos, son nuestros dirigentes los que están alrededor de nosotros y siempre pedimos identificación. Cuando hay alguien que no tiene identificación o no sabemos de dónde proviene, nosotros no le dejamos participar en los eventos. Eso nos ha permitido tener seguridad, salvaguardarnos.

Los costos de lo expuesto en este proceso han sido altos. Nuestros principales líderes, como el padre Campo Elías de la Cruz y el Padre Wilson Hurtado, han salido del país. En el mes de diciembre del año pasado, o sea hace 5 meses, fueron muertos Luis Melo y Melesio Lesmes. El primero lideraba las negociaciones de la explotación del petróleo y el segundo lideraba el proceso de los desplazados, por no hablar del magnicidio del los indígenas y campesinos.

Para finalizar, creemos que estos escenarios son necesarios y que tenemos la esperanza en que España va contribuir a generar hechos de paz y no de guerra. Nosotros les hemos sugerido que visiten el departamento, o que por lo menos propicien estos espacios con participación de la comunidad europea.

Quisiera dejarles un breve resumen de lo que es nuestra organización ANUC, y de cuál es la agenda que desarrollaremos este año, siendo lo principal la participación en la movilización del 15 de mayo.

Jefferson Orejuela

Representante de la comunidades de Cacarica y Jiguamiandó

Territorio propio que parece ajeno

El mundo debe conocer la situación de las tierras de las familias de los Consejos Comunitarios de la Cuenca del Río Cacarica, asociadas en las Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad (CAVIDA), y de los Consejos Comunitarios de los Ríos Jiguamiandó y Curvaradó. En el bajo Atrato chocoano.

Somos pueblos negros, vivimos cerca de la frontera con Panamá y del Océano Pacífico y llegamos al Atlántico por el río Atrato.

Nuestra Resistencia actual lleva nueve años. Decimos actual porque estamos rehaciendo la memoria de nuestros ancestros de la esclavitud, cuando fuimos llevados del Congo y del occidente de África a Colombia, haciendo memoria de Benkos Bihajo, de los palenques, de Kunta Kinte, de Malcom X, de Martin Luther King.

Ahora hace más de nueve años que comenzó la violencia armada en nuestros territorios. Esa violencia se inicia cuando más de ocho mil campesinos, la mayoría afrodescendientes, fuimos desplazados por la operación Génesis, que desplegó el ejército entre las cuencas del Salaquí y el río Cacarica, entre el 24 y el 27 de febrero de 1997. Se trataba de una estrategia del Estado contra la guerrilla, en la que se combinó la estrategia regular y la paramilitar. Nunca se atacó a la guerrilla, sino a la población civil. Nosotros, los del Cacarica salimos obligadamente a Turbo, a Bocas del Atrato, y otros buscaron refugio en Panamá. Los del Jiguamiandó y Curvaradó se internaron en la selva, resguardándose en los árboles, y otros salieron en movilización hacia Pavarandó.

El retorno se da en medio de la guerra. Somos poseedores de un título colectivo conseguido con ardua lucha.

La propiedad de las tierras de la zona del Cacarica, con el entonces presidente Ernesto Samper, fue lo único que el Estado nos reconoció. Obtuvimos 103.024 hectáreas, protegidas por el artículo transitorio 55 de la Ley 70, aprobado por el entonces presidente Gaviria en el año 1993. En el caso de la zona Curvaradó y Jiguamiandó consiguieron el reconocimiento de propiedad con el presidente Andrés Pastrana Arango.

Desde el 13 de mayo 2003 hay una fuerte presencia militar en Cacarica, como consecuencia de la política de seguridad del presidente Uribe de atacar las Zonas Humanitarias; y esa presencia militar coincide con los lugares donde va a cruzar la panamericana, que es una carretera que tienen planeada.

La presencia militar nos ha ocasionado demasiados problemas. Un desplazamiento forzado interno es un ejemplo de que no han respetado nuestros mecanismos de protección, como lo es la Malla de la Vida, con la que limitamos nuestro territorio como civiles. Han perseguido

“Nos matan con hambre. Nos matan con balas. Nos matan con mentiras. Nos matan con juicios injustos. Nos matan destruyendo la biodiversidad del planeta. Nos matan, pero nosotros queremos morir naturalmente. Queremos morir como la vida misma”



a las niñas y los niños, han ofrecido dinero para destruir la Malla de la Vida, han hecho montajes de fotos para mostrarnos a nuestros padres como guerrilleros, nos han montado programas de televisión en los que quieren mostrar que estas zonas son campos de concentración. Después de cinco años de existencia de una base paramilitar en el caserío de La Balsa, donde han asesinado, torturado y se han llevado nuestros bienes de consumo, nos han quemado mil bultos de maíz y de arroz y han deforestado a través de la empresa maderas del Darién. Desde hace ya dos años, han llevado allí nuevas personas, ajenas a nuestro territorio, a quienes han entregado parcelas de tierra, una hectárea, expropiando a los que habitan en las Zonas Humanitarias, sembrando primitivo y plátano para exportación dentro del proyecto Plan de Alternatividad Social (PASO) de los paramilitares, que es la raíz de esa estrategia paramilitar, la cual está tomando mucha fuerza en nuestro territorio y la calificamos como la raíz de la impunidad.

Hoy es más claro entender y decir qué es el desplazamiento, para qué y por qué lo hicieron, todo está claro. Las acciones y hechos que hoy se están desarrollando en los territorios de títulos colectivos de las comunidades afrodescendientes, expropiando a los dueños de las tierras con engaños y a la fuerza, con acciones ilegales de legalización de títulos para el desarrollo de proyectos agroindustriales. A otros les proponen asociarse a la empresa, cosa que para un campesino es la propia esclavitud moderna, lo ubican en una o dos hectáreas de tierra sin derecho a ampliarse más mientras que la empresa de la impunidad tiene conocidas y distribuidas las tierras donde va a desarrollar sus proyectos.

En el Cacarica sabemos de una empresa, llamada Multi-fruits CIA, S.A, que tiene 20.000 hectáreas en cuatro comunidades de nuestro territorio colectivo para la siembra de plátano baby, cacao y palma africana. Esta tierra fue vendida por el representante legal por 50 años para sembrar un primitivo importado desde Antioquia a nuestra tierras, sabiendo que nosotros ya teníamos y no lo necesitábamos. Además, con todo ésto están deteriorando el 40% de nuestra biodiversidad, acabando con el oxígeno y modificando los recursos hídricos.

Son ya 85 las personas asesinadas, desaparecidas y torturadas de nuestro proceso en el Cacarica. Estamos afectados por la estrategia de seguridad democrática y el proceso de impunidad con la Ley de Justicia y Paz, con la que se asegura a los paramilitares su justicia.

No son otros, son los mismos que nos desplazaron los que siguen desarrollando programas políticos, económicos y sociales dentro de las tierras colectivas de las

comunidades del Cacarica, Jiguamiandó y Curvaradó, donde han expropiado a muchas personas de sus tierras.

El Curvaradó son 46.084 hectáreas, y el Jiguamiandó, 54.973 hectáreas del Territorio Colectivo entregadas por el Presidente Andrés Pastrana en 2001, mediante un título de propiedad. Desde ese momento se inician oleadas de violencia en el Curvaradó con desapariciones y asesinatos, incluso, de mujeres embarazadas. En la comunidad del Jiguamiandó y Curvaradó, hasta la fecha han sufrido 14 desplazamientos forzados. Solamente uno de ellos por combates, y otro a cargo de la responsabilidad de las FARC-EP. Los demás, por la acción militar y paramilitar. Son 113 crímenes, cuatro bajo la responsabilidad de las FARC-EP y 109 bajo la responsabilidad del Estado.

En el 2003, después de desplazar a todos los del Curvaradó, empezaron las agresiones en el Jiguamiandó. Padecieron incursiones armadas de la estrategia militar regular e irregular, asesinando niños. La comunidad ha logrado un pronunciamiento del INCODER y de la Defensoría del Pueblo frente al cultivo ilegal de palma aceitera dentro del territorio colectivo de comunidades negras. Las empresas palmicultoras se han apropiado de manera indebida e ilegal de títulos de propiedad de los pobladores y actualmente tienen sembradas más de cinco mil hectáreas de palma y se piensa sembrar de palma la superficie equivalente a unos 4.250 estadios de fútbol.

En la cuenca del Jiguamiandó, cuando los campesinos retornaron, encontraron las tierras, las fincas y hasta las tumbas de los muertos llenas de monocultivo de palma. Estos cultivos están encerrados y han impuesto la propiedad privada. Todo ésto lo ha hecho la empresa sabiendo que nuestras tierras son de propiedad imprescriptible, inalienable e inembargable, según el artículo 55 de la Ley 70. La nueva resolución 1.516 del INCODER dice que los empresarios pueden hacer alianzas con las comunidades, y el Ministro de Agricultura se quiere aprovechar de eso diciendo que dentro de los títulos colectivos hay títulos individuales; los cuales, según él, ya fueron vendidos por los dueños, pero todo esto es

“Somos pueblos negros, vivimos cerca de la frontera con Panamá y del Océano Pacífico y llegamos al Atlántico por el río Atrato”

una farsa porque conocemos que han se han incluido personas que murieron hace años como firmantes de contratos de venta de las tierras.

En la zona del Cacarica también hay una compra ilegal de tierras por parte de los paramilitares desde la base de La Balsa, a dos horas a pie de nuestras Zonas Humanitarias. Dicen que para que las comunidades del Cacarica puedan efectuar la siembra allí tienen que presentar los títulos colectivos, pero como de éstos hay individualidades y algunos de sus dueños no retornaron están haciendo títulos falsos a nombre de otras personas, a quienes dan una hectárea de monte.

¿Quién dijo que nosotros somos palmicultores o extractores de los recursos forestales o empresarios madereros o sembradores de coca o de primitivo o protectores de carreteras? Nosotros somos campesinos negros de la humanidad, de la biodiversidad. Esa misma situación de negación de nuestros derechos la vivimos nosotros. El territorio hermoso de biodiversidad está siendo arrasado por empresas, que cuentan con el apoyo paramilitar y de las Fuerzas Militares.

Nosotros sobrevivimos con plátano, arroz, yuca, ñame, etc. Además está prohibido sembrar estos cultivos en el Amazonas y el Pacífico y nosotros estamos en el Pacífico.

Que no hay conflicto es sólo una teoría. Todavía existe la violencia sociopolítica, las violaciones de nuestros derechos en cuanto a la economía y el 42% de nuestra gente sin empleo. Para nosotros, el territorio es lo que nos ayuda a economizar y si nos lo quitan, van a provocar muchos más desempleados y damnificados.

Tanto en Jiguamiandó, el Curvaradó, como en la zona del Cacarica, vivimos en lugares delimitados como sitios exclusivos de residencia de la población civil y les damos el nombre de Zonas Humanitarias.

De diversas formas, con la negociación con el Estado, regresamos todos a nuestras tierras en procesos comunitarios renovados a través de asentamientos, lugares de habitación, de celebración y de comunidad, donde habitamos los que asumimos proyectos de vida alternativos en medio de la guerra.

Proyectos de vida que se basan en los principios de la verdad, la libertad, la justicia, la solidaridad y la fraternidad como las bases de una casa, de un proyecto de sociedad donde estemos y existamos todos en el hermoso territorio que es el planeta Tierra, en el aire de la humanidad, en los mares del mundo, en el Universo.

“Estamos afectados por la estrategia de seguridad democrática y el proceso de impunidad con la Ley de Justicia y Paz, con la que se asegura a los paramilitares su justicia”

Desde esas bases nacen los mecanismos de protección, de propuestas, de educación propia, de la medicina tradicional, de la alimentación básica, de amor en el territorio, de las decisiones tomadas desde la opinión de todos y de la democracia.

PROTECCIÓN Y NATURALEZA

La protección tiene aquí dos aspectos. La protección en nuestro refugio natural. Es el ambiente en el que hemos nacido. Los ríos, los caños, las aves, el zaino, los peces, los árboles, las flores, las mariposas en las que Dios nos trajo al mundo y que nos permite que allí nos refugiemos en tiempos de acecho, en tiempos de destrucción, de ametrallamiento, de bombardeos, de presiones. Toda la naturaleza se nos ofrece como una parte de nuestra vida, como lugar de refugio del cuerpo, del alma, de la mente... Por eso entramos en ella en los momentos de crisis, como cuando han querido hacer masacres en 1997, en 2001, en 2003.

La protección es también conservación. Por eso creemos las zonas de reserva de la biodiversidad y de pan coger, para defender la naturaleza y defender el derecho a alimentarnos con lo nuestro. En el Cacarica ya tenemos tres zonas de reserva y en el Curvaradó, una. Están en nuestras fincas. Sembramos con semillas propias, tratamos de reducir al máximo los productos químicos, pero resembramos. La protección es la armonía con la naturaleza. Tenemos bancos de semillas y queremos su protección. Hace pocos días conocimos los resultados del progreso, del desarrollo que nos quieren imponer: cambios climáticos y destrucción por los consumos humanos.

PROTECCIÓN Y ZONAS HUMANITARIAS

En el caso del Cacarica, luego de una incursión de tipo paramilitar con la presencia de militares de la Brigada XVII en junio de 2001, decidimos nuestros mecanismos



“Tanto en Jiguamiandó, el Curvaradó, como en la zona del Cacarica, vivimos en lugares delimitados como sitios exclusivos de residencia de la población civil y les damos el nombre de Zonas Humanitarias”

de protección propios, como el escondite en los árboles y las reservas de vida en las zonas altas. Decidimos delimitar el lugar de vida de nuestra comunidad y propusimos la creación de dos Zonas Humanitarias: Esperanza en Dios y Nueva Vida. Ya no era simplemente porque allí habitamos los que creemos en un proyecto de vida, sino que los definimos durante la guerra como el lugar al que ningún armado puede ingresar; como el lugar de la construcción de la dignidad. Es un mecanismo de protección más claro, perfectamente visible que llamamos la Malla de la Vida. Muchos lo llaman, para desprestigiarnos, cocheras; y otros, los militares y empresarios, campos de concentración y nidós de guerrilleros.

Pero en las Zonas Humanitarias no se tortura, ni se niega la libertad, en ellos se estudia, se trabaja, se ora, se participa, se siembra, se come y se baila. Eso es una piedra en el zapato. Cuando la política de seguridad dice: “Militaricen todos los territorios, pero a ese terruño no entren, porque ese pedazo de tierra es propio de los civiles”. Es un mecanismo de prevención, de diferenciarnos. Pero lo rodean, lo hostigan y lo presionan, pero no entran. Es nuestro y lo hacemos respetar. Y desde allí luchamos por todo el territorio.

En el Jiguamiandó, donde habitan en resistencia civil más de mil personas, crearon tres Zonas Humanitarias desde 2003: Bella Flor Remacho, Nueva Esperanza y Pueblo Nuevo; y en el Curvaradó crearon una desde abril de este año.

Desde la verdad, la libertad, la justicia, la solidaridad y la fraternidad como principios, las Zonas Humanitarias son un mecanismo de protección que completa la protección de la madre tierra con sus árboles y la espesa selva en la que podemos dormir durante largas noches para proteger nuestras vidas.

PROTECCIÓN Y SABERES

Desde nuestro desplazamiento nos organizamos para reconocer nuestros derechos como comunidades negras, como humanos que somos, para reconocer lo que nos ha sido destruido con la violencia; para distinguir las violencias: la violencia del Estado y la violencia de la guerrilla; para construir propuestas que miren al fondo de las cosas. El mecanismo de la Educación Propia, es el otro mecanismo de la Protección.

La educación es una de las materias primas de una organización nuestra. La educación y la salud no han sido reconocidas por el Estado, pues él quiere imponernos profesores que tienen que ver con el paramilitarismo y van a querer privatizar nuestra cultura y hacernos sólo uno receptores de mentiras sobre un Estado y no unas personas críticas autónomas que piensan y se pueden expresar.

También es imprescindible que los jóvenes, niños y todos los demás sepamos qué estamos construyendo y hacia dónde vamos, tener claro que somos los niños y jóvenes de hoy y de ayer los que algún día tomaremos las banderas de nuestro proceso. Eso tiene varios componentes.

La educación permanente de la comunidad en formación a través de asambleas, reuniones por combos. También a través de la elaboración de fichas donde hacemos análisis familiar, comunitario, local, nacional e internacional y posturas. Sin mirar la situación permanente podemos caer en el engaño o no lograr ver el bosque y quedarnos con las ramas.

Proponemos también la educación propia a través del proyecto de Colegio Integral, que es una escuela propia de primaria y de secundaria. Somos una comunidad que cree en autodeterminarse, que tiene todo el derecho a elegir sus propios profesores. Y lo hemos hecho aún en contra del Estado y de la política de seguridad. Nosotros tenemos una etnoeducación en primaria y secundaria que significa educación propia de etnias y culturas. Su objetivo es saber cómo enlazar la problemática y mirarla desde allí. También recupera la cultura y la tradición, lo ancestral, pero sin dejar de ver materias fundamentales. Todo ello desde una mirada en el proyecto de vida, con la realidad de hoy, descascarando y haciendo legibles todas las ilegalidades y corrupciones del Estado, los mecanismos como el poder quiere destruir la vida y destruir el planeta, así como los mecanismos de cómo a través de la ciencia se puede destruir o humanizar.

Nuestros profesores en la primaria son los bachilleres de la comunidad, acompañados por estudiantes solidarios de la Universidad Nacional, de la Universidad del Cauca y de la Javeriana, que se van al territorio por varios meses o un año, coordinados con los de Justicia y Paz y los campesinos del Cauca, Meta y los indígenas Kankuamos. Ahí hacemos un espacio de saberes haciendo de lo alternativo algo concreto entre los pueblos, conociendo culturas. Conociendo y haciendo aportes.

Esos profesores son de la comunidad y trabajan para el proyecto de vida de la mujer y el hombre nuevo, y se están formando en una universidad alternativa en la que participa Justicia y Paz. Una Universidad que no trata de medir conocimientos, sino de enseñar quehaceres cotidianos para cambiar nuestro entorno y la sociedad.

PROTECCIÓN Y EL DERECHO

Nuestras comunidades apuestan por hacer que el derecho sea derecho, defiendan al débil del poder, ordene el desorden y haga justicia. Aceptamos las normas de otros que han acordado que son las de la convivencia y de la democracia, esperando que las cumplan. Pero hemos visto que no las cumplen, que hacen trampas para que todo sea impunidad. Entonces, la autoridad deja de ser autoridad.

En el derecho o las acciones jurídicas buscamos que haya verdad y justicia pero no es la única manera. Nosotros hemos hecho derechos de petición, tutelas, acciones en la Corte Constitucional, en el Consejo de Estado, Constancias y así hemos logrado dejarles ver lo que nosotros somos, hemos ganado espacios, vemos un hueco grande entre las conclusiones y la realidad, ganamos pero no cumplimos. Las acciones jurídicas buscan hacer que el Estado y que las autoridades se comporten como les compete con los ciudadanos.

Podemos concluir que los fallos judiciales no han sido cumplidos, porque no hay voluntad del poder de cambiar. Nosotros con nuestros ojos descubrimos que la investigación de la justicia es la impunidad. Por eso no nos atemamos a la justicia nacional que está dañada.

Nuestros líderes y los que nos acompañan de Justicia y Paz han sido acusados de terroristas, de asesinos, de torturadores... Y nosotros hemos dicho que es necesaria la defensa y hacemos constancias. Entonces hicimos que la Fiscalía fuera a la Zonas Humanitarias. Allí les hicimos un ritual con velas, con frases, con cantos donde le exigimos actuar en verdad. Y cuando

declaramos, afirmamos lo que somos y lo que queremos ser; y mostramos qué es lo que hay sobre los montajes judiciales, militares y empresariales.

Nosotros participamos en una defensa judicial a pesar de la corrupción de la justicia, pero construyendo alternativas. Ahora, si no nos defendemos nos llevan al sótano de una cárcel sin pelear. Nosotros peleamos contra los acusadores ahí, y también por fuera, con la solidaridad internacional. Intentamos hacer que lo torcido que se haga derecho.

Pero nosotros creemos que la justicia no es sólo la ley. Creemos que la justicia es la ética, que es algo más que la ley, que es importante el castigo pero es más importante la sanción moral, la verdad pública, el que se reconozca a los responsables y a los verdugos, y que se digan los destrozados del alma, de la vida: eso que no se paga ni con cárcel ni con dinero.

Ese es el componente más importante: lo que hacemos en la justicia comunitaria, nuestra búsqueda de armonía interna y con la naturaleza, lo que hacemos como sanción moral a través de demandas en la Comisión Interamericana. Estamos adelantando procesos de descertificar las empresas madereras y las palmicultoras, para mostrar la destrucción ecológica y de la humanidad. Por eso hemos elevado quejas en la OIT, en la Comisión y la Corte Interamericana y ante Tribunales Éticos y mecanismos legales para la protección de territorios colectivos.

Un aspecto central es la memoria, los monumentos que construimos, los que proponemos, la comisión ética de los crímenes contra las comunidades en resistencia, los libros, las conmemoraciones.

Por todo lo que es nuestro, por toda nuestra dignidad destruida, nosotros exigimos. Vamos por el derecho.

“En el Jiguamiandó, donde habitan en resistencia civil más de mil personas, crearon tres Zonas Humanitarias desde 2003: Bella Flor Remacho, Nueva Esperanza y Pueblo Nuevo; y en el Curvaradó crearon una desde abril de este año”



“Creemos que la justicia es la ética, que es algo más que la ley, que es importante el castigo pero es más importante la sanción moral, la verdad pública, el que se reconozca a los responsables y a los verdugos, y que se digan los destrozos del alma, de la vida: eso que no se paga ni con cárcel ni con dinero”

PROTECCIÓN Y ACOMPAÑANTES Y CORDONES HUMANOS

También los acompañantes de tiempo completo, que son de Justicia y Paz, han sido el banco. En el Chocó decimos que cuando a uno no le alcanza la altura, se busca el banco para alcanzar; y Justicia y Paz ha sido el apoyo para alcanzar. En las seis Zonas Humanitarias del Jiguamiandó, el Curvaradó y del Cacarica se encuentran de manera permanente. Ellos se enfrentan como escudos humanos cuando aparecen a atacar a la comunidad, exigen respeto, ponen el pecho y activan las alertas tempranas. Ellos son también profesores en el bachillerato y en la alfabetización.

Ellos son una gracia de Dios, son un punto moral muy importante. Hemos visto como el Estado les ataca. Los militares les persiguen con los paramilitares; las agencias humanitarias les acusan de manipular. Algunos nos dicen que podemos recibir dinero si ellos se van; otros los usan para decir que acompañan pero no es verdad; otros les excluyen de foros y de discusiones porque son una piedra en el zapato. Su voz es una gran verdad. Hablan con el corazón y con la moral. Recogen los muertos, se meten, dejan de dormir, chupan moscos y zancudos. Ellos aman a la gente y a nuestra lucha. Ellos lo denuncian todo, no guardan palabras; dicen lo que ven y lo que viven a nuestro lado. Por esa verdad, que es la nuestra, a ellos les excluyen de muchas cosas, les bloquean hablando mal, no les apoyan económicamente...

Y aún así, asumen todos los riesgos. Por eso son acompañantes.

Esa presencia se complementa con la de PBI y la del PASC de Canadá, un grupo nuevo de acompañamiento permanente en el Jigua y que nació por la acción de Justicia y Paz. Esos son los acompañamientos que se

mantienen en el Bajo Atrato. Los permanentes de Justicia y Paz y PASC y los casi permanentes de PBI. Nadie más está en la región, todo el mundo se ha ido. Algunos dicen que porque no hay muertos, cuando aún la guerra sigue; cuando se están apropiando de las tierras nuestras; cuando están implementando los proyectos de monocultivos. A veces uno dicen que están, pero no es cierto. Y en el caso del Jiguamiandó, Médicos del Mundo es muy importante como presencia internacional.

Otro mecanismo de protección son los hermanamientos con ciudades o grupos de personas como los que hay en Italia con la Red de Solidaridad y los que hay con el Colectivo Sur Cacarica de Valencia y Octavo Día por la Justicia de Estados Unidos, así como los Chicagoans.

Pero también están los encuentros Internacionales que hemos realizado en el Cacarica y el Jiguamiandó, y uno en el Cauca. Son ya nueve. Se trata de encuentros Internacionales sobre los problemas de ecología, impunidad, sanción moral, derechos de los niños y las mujeres, neoliberalismo y del ALCA. Hemos creado a partir de 2001 la Red de Alternativas, que tuvo su último encuentro en Madrid y Valencia, en España. Somos comunidades en resistencia de Colombia y 17 más de América Latina, entre ellos el Movimiento Sin Tierra de Brasil, la Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo, el CIPO y la Sociedad Civil de las Abejas de México. Hemos definido un plan de trabajo y de acciones; entre ellas: la Peregrinación al Jiguamiandó y Curvaradó y a la frontera con Panamá en el Cacarica, que ya se realizaron, y también la Comisión Ética

Otros modos de presencia han sido los cordones humanos a través de la presencia de cinco días a seis meses de voluntarios internacionales del equipo de Justicia y Paz. Ellos apoyan en las clases, en la recolección de historias y en la memoria.

PROPUESTAS

He retomado las conclusiones del Encuentro Internacional en Madrid de la Red de Alternativas y las conclusiones de las últimas asambleas en el Jiguamiandó y Cacarica.

· Somos Resistencia Civil Popular, defendemos la Vida y el Territorio.

· Afirmamos que el ALCA, TLC a través de obras de infraestructura de cómo la carretera panamericana, y los proyectos agroindustriales de palma, de primitivo y de coca protegidos por el ejército y los paramilitares son la

destrucción de nuestras vidas y de los territorios, lo que es grave no solo para nosotros sino también para la humanidad.

· Afirmamos desde nuestro Derecho a la Memoria, a la Verdad, a la Justicia y a la Reparación Integral que se están destruyendo las posibilidades de una paz verdadera con el proceso de desmovilización paramilitar, que está permitiendo que todo quede en la mentira, nuestro territorio invadido y nuestras almas a punto de perderse por el proyecto de muerte.

· Por eso proponemos el apoyo a las Tres casas de protección de semillas nativas en el Meta, el Bajo Atrato y el Cauca. Pueblos y Semillas. En esos lugares se custodian las semillas ante transgénicos, se crean escuelas de formación, de producción limpia y de intercambio.

· Apoyar el convenio de protección de semillas con el MST y el Gobierno de Venezuela.

· Apoyar las acciones jurídicas de intervención ante la Carretera Panamericana, el proyecto de palma aceitera y agroindustria ganadera, y de primitivo, pues se está destruyendo la biodiversidad del planeta y de la humanidad, y ustedes pueden intervenir.

· Apoyar las acciones de presión sobre el Estado colombiano, que por medio del INCODER, Codechocó, y sus empresas reconstruyan nuestro territorio y suspendan la siembra de palma y de primitivo y el redoblamiento paramilitar.

· Apoyar nuestra exigencia de respeto a nuestras construcciones de alternativas y esperanza en medio de la guerra con el reconocimiento de nuestros Proyectos de Vida como salidas a las causas de la guerra.

· Apoyar la iniciativa del derecho a enterrar y el derecho a la memoria en el que convocamos a las iglesias cristianas a acompañar el desentierro de nuestros desaparecidos y asesinados para ubicarlos en los lugares que se merecen en el desarrollo de la memoria de nuestros ancestros, que se inicia en 2006.

· Apoyar la propuesta de nuestra educación propia con su vinculación en las clases, así como la participación en la complementación universitaria alternativa y en el cordón humano.

· Apoyar la propuesta de protección y apadrinamientos de los territorios que se vienen adelantado a través de la visibilidad de la propiedad de las tierras y las mejoras con carteles internacionales de solidaridad y los mensajes de la propiedad y la participación en las jornadas

de verificación de la propiedad.

· Apoyar la propuesta de reunión con la dirección del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional con las comunidades del Jiguamiandó, Curvaradó y Cacarica por las políticas de producción, de fortalecimiento de las democracias y la institucionalidad que afectan a nuestros derechos y a los de la humanidad.

· Apoyar la Creación de la Comisión Ética como mecanismo de las comunidades de afirmar los mecanismos de impunidad jurídica, política, económica y social, las afecciones profundas al tejido comunitario y las propuestas de sanción y de reparación ética.

“Otro mecanismo de protección son los hermanamientos con ciudades o grupos de personas como los que hay en Italia con la Red de Solidaridad y los que hay con el Colectivo Sur Cacarica de Valencia y Octavo Día por la Justicia de Estados Unidos, así como los Chicagoans”



Betty Puerto

Representante de la Organización Femenina Popular, OFP

Desplazamiento, territorio y mujer

Con la amenaza: “¿Nos vende, o prefiere que le comparamos después a la viuda?” Le preguntaron los paramilitares a un campesino para obligarle a malvender su tierra; o: “Venimos por la llave de esta casa” le dijeron a la compañera de la Organización Femenina Popular, “porque de hoy en adelante esta casa es nuestra”, sentenciaron; o: “Tiene una hora para desalojar porque el patrón se enamoró de esta territa”. Estos ejemplos son sólo una pequeña muestra de lo que sucede en Colombia y de la forma como, a través de la fuerza de las armas, los paramilitares se han adueñado de cerca de cuatro millones de hectáreas de las mejores tierras, quitadas violentamente a los campesinos, al sector popular, a las comunidades indígenas y a las comunidades afrocolombianas. En esta realidad, uno de los más crudos resultados es que el 75% de las víctimas son mujeres, niñas y niños.

Para empezar, es muy importante resaltar la identificación de la mujer con la tierra, así como la tierra es la madre, dadora de la vida, el lugar donde nos ubicamos y hacemos posible la vida. Para las mujeres, y en particular para las campesinas, indígenas y aquellas de clases populares, la tierra significa el lugar donde llegar a ser. Tanto como mujer, como madre o como sujeta política y social. Pero simbólicamente, el terruño, su casa, es el lugar donde ha crecido, ha aprendido a ser mujer, ha parido sus hijos y ha gozado del universo. En esta relación, la tierra le provee un lugar, protección y alimento; y a su vez, ella —la mujer— protege y alimenta su terruño o su casa, que representa simbólicamente el útero donde goza de sus hijos, los forma, los alimenta, los guarda y protege cuando sea preciso.

En Colombia, desde la Cacica Gaitana en la región de Huila, o Yarima, princesa indígena que surgió de las aguas del río Magdalena para defender el territorio

durante la conquista española a Policarpa Salabarrieta, Manuelita Saenz, y muchas otras mujeres históricas en Colombia se han convertido en símbolos de resistencia, pasando por las organizaciones de mujeres, las lideresas, las sindicalistas, las trabajadoras, las defensoras de derechos humanos, aquellas que han dedicado su trabajo a la defensa de una vida digna y en la construcción de un país en paz y con justicia social para sus generaciones, hasta aquellas mujeres de clases populares, campesinas, indígenas, y afrocolombianas. Está claro que las mujeres en Colombia históricamente han luchado por un lugar donde poder llegar a ser.

Trataré de hacer una reflexión situando el trabajo de la Organización Femenina Popular y la forma como enfrenta el desplazamiento, señalando los mecanismos de resistencia, sus luchas y su organización en un escenario dominado hoy por el proyecto paramilitar.

Una de las expresiones más dramáticas de la violencia en Colombia es el desplazamiento forzado, esta problemática expresa la violenta interrupción del proyecto de vida y enfrenta a las personas y a las comunidades a una situación extraña expuesta a toda clase de vejámenes contra su dignidad, su integridad, su economía y su ciudadanía. A su vez, la respuesta estatal compone, cuanto mucho, un enfoque asistencialista y no contempla la prevención, protección ni reparación de los afectados directos.

Para las mujeres, la disputa de los actores armados por el control del territorio y la estrategia de desplazamiento y confinamiento a la que son sometidas están relacionadas con los intereses económicos y políticos, para los cuales las dinámicas del conflicto son funcionales a la imposición de un desarrollo hegemónico,

“Para las mujeres, y en particular para las campesinas, indígenas y aquellas de clases populares, la tierra significa el lugar donde llegar a ser”

ajeno a cómo las mujeres y las comunidades conciben el desarrollo, desde su perspectiva económica, étnica y cultural.

No obstante, el desplazamiento forzado no se puede analizar como una mera consecuencia de las acciones de los actores armados. De ello podríamos deducir que no es un efecto del conflicto sino un arma de guerra, una estrategia utilizada para acumular capital económico y político. Es por ello que en las regiones con grandes riquezas y con fuerte presencia del movimiento social, es donde con mayor rigor confluyen la violencia por la tierra y la violencia política.

El desplazamiento se relaciona con la aplicación de un modelo económico que privilegia la industria, el comercio, la acumulación de capital en detrimento de las poblaciones campesinas, que deben abandonar sus parcelas o venderlas bajo la presión violenta ejercida por los actores armados, ya que estas tierras tienen ahora otro valor, derivado de la implantación de megaproyectos de multinacionales, así como de grandes negocios como la ganadería extensiva o la palma africana, entre otros. Todo esto sucede en regiones con una alta riqueza natural, con una gran biodiversidad, y donde se encuentran grandes cantidades de minerales e hidrocarburos, como yacimientos de oro y carbón, entre otros.

Cabe mencionar que, bajo esta dinámica, el control del territorio por los actores armados va más allá de la estrategia del control político y militar. Se evidencia una relación con las actividades económicas de las regiones que consiste en garantizar el buen desarrollo de la actividad económica y evitar cualquier tipo de molestia en la consecución de la misma. En esta relación, los que reciben protección pagan el tributo y financian el proyecto paramilitar.

La implementación de la estrategia de desplazamiento y confinamiento pasa por la militarización de la vida

cotidiana y los cambios en el concepto de seguridad. Para las mujeres, la seguridad es entendida como un derecho de los pueblos y un deber de los Estados hacia sus conciudadanos, desde la perspectiva del disfrute integral de los derechos económicos, sociales, culturales y colectivos. La seguridad no es militarización, despojo y represión. La seguridad no es gastar en la guerra. La seguridad debe estar orientada a recuperar lo que es nuestro, el territorio, la dignidad que ha sido cercenada por la acción de los violentos. La estrategia pasa por el amedrantamiento, las fumigaciones indiscriminadas a cultivos de uso ilícito, la imposición del Plan Colombia, la promoción, desarrollo y ejecución de los megaproyectos, el asentamiento de empresas multinacionales, e incluso la disputa por la presencia misma de los actores armados en cada territorio. Todas estas dinámicas alimentan el proyecto de guerra.

En este punto, es imperativo señalar como esta estrategia de control del territorio ha llegado a picos de exacerbación de la violencia, representados en la utilización del cuerpo de las mujeres como territorio de guerra, de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional *Cuerpos marcados, crímenes silenciados*. En Colombia las mujeres son utilizadas como territorio a conquistar; son sometidas a violaciones sexuales para sembrar el terror, como control militar a la población, para vengarse y humillar al enemigo; son acumuladas como trofeos de guerra; son utilizadas como esclavas sexuales y forzadas a la prostitución.

Ésta es una forma utilizada en las guerras más cruentas del mundo como estrategia para generar condiciones de exterminio social, étnico y cultural de grupos y poblaciones. Ésta también es una forma de genocidio, ya que un grupo social que pierde sus mujeres es un grupo destinado a fenecer.

De acuerdo con informes de la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), existen en Colombia 3.100.000 desplazados en el periodo comprendido entre 1996 y 2005¹. En el marco de estas cifras, un 75% son mujeres, niños y niñas.²

1. En *CODHES Informe*. Boletín informativo de la Consejería para los Derechos Humanos y el desplazamiento. Bogotá, 2005.

2. *Human Rights Watch (HRW)*. En su informe sobre la situación de derechos humanos para 2006. Criticó la misión de la OEA en el actual proceso de verificación de la desmovilización de los paramilitares, en tanto no ha hecho seguimiento de las denuncias y abusos presentados. El informe sostiene que Colombia padece la peor crisis de desplazamiento interno del mundo después de Sudán, con más de tres millones de personas desplazadas. El mundo, 20/01/06.



CONFINAMIENTO

Frente al confinamiento no existen cifras reales ya que se dificulta la entrada a estas comunidades. Son comunidades sitiadas por cercos armados por parte de los actores del conflicto, comunidades que han sido estigmatizadas como auxiliadoras del otro bando. Las comunidades son bloqueadas para impedir su supuesto apoyo al adversario. El actor armado impone normas, cobra impuestos, impide la libre movilización, bloquea la información y la atención médica y restringe la entrada de alimentos y medicamentos a las comunidades.

Del desprendimiento al acometimiento

Desde la comprensión de que el desplazamiento implica la pérdida de las raíces y de la identidad y conlleva la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y colectivos y, en algunos casos, de los civiles y políticos se concluye que se termina con distorsionar la noción de seguridad humana, la intimidación, la propiedad y el derecho a un hábitat digno. Hay que desalojar la tierra o la vivienda por orden directa del actor armado y, en muchos casos, hay prácticas inmediatas de repoblación, lo que hace que el significado de la historia personal y de identidad se vea cercenada.

Para muchas mujeres vale más la vida de sus hijos y de su familia que los bienes. Es así como emprenden una larga caminata que en muchos casos no termina. En este momento ocurre el **desprendimiento** que arrebató la identidad. Este momento no da la oportunidad de pensar, ni de resistir. Se recoge lo que se puede, se deja la historia, los bienes, la sinergia que produce el sitio donde se nace, se crece y donde se hace familia.

La mujer, muy particularmente, se aferra al lugar ya que históricamente es la primera que construye su *maloka*, un espacio territorial para producir. No obstante, ante la urgencia por la vida de su propia familia, se ve obligada a enfrentar esta nueva situación. Se observa como factor común que lo material deja de tener valor ante la vida, lo que hace que estas mujeres se aferren y defiendan la vida, no sólo porque la producen, sino porque la padecen.

El **Acometimiento** aparece cuando empieza a entender la necesidad de volver a empezar, la necesidad de ubicar ese lugar, ese territorio como sostén de la vida y de la actividad social. A pesar de lo adverso de la situación, emprende una nueva vida, vuelve a empezar aunque siga marcada en ella la nostalgia, el terror paralizante, el vacío de sus seres queridos

ausentes y las pérdidas económicas. Sin embargo, la necesidad de la recuperación de ese espacio lo conduce a construir, una y otra vez, un lugar nuevo.

Las mujeres, en Colombia, se han organizado en la búsqueda una solución desde ellas, -ya que no existe una política pública para atender realmente esta grave situación-. Existen muchos espacios para señalar, desde las Comunidades de Paz que se han negado a abandonar el territorio, los pueblos indígenas y afrocolombianos, los espacios humanitarios, hasta los grupos que se han desplazado y hoy se encuentran en sectores receptores o en organizaciones de derechos humanos que las acogen. No obstante, es imperativo señalar que existen centenares de familias sueltas, con múltiples afectaciones de tipo social, psicológicas, de salud y económicas, sometidas a un enorme empobrecimiento. Son las que vemos practicando la mendicidad en las calles de las principales ciudades de Colombia.

No obstante, el trabajo de la Organización Femenina Popular (OFP) se orienta desde el civismo y la autonomía y se enmarca en una decisión por la resistencia a la guerra. Pero esta forma de organización también es señalada, perseguida y estigmatizada. Sin embargo, las mujeres persisten en su lucha por la vida y en la defensa del territorio a pesar de que realizan su trabajo en regiones dominadas hoy por el paramilitarismo.

El **Afrontamiento** de esta problemática del desplazamiento pasa por comprender que es una condición económica, social y política insostenible. La OFP, a su vez, considera que no es la organización a quien le corresponde resolver el problema, pero sí procurar que las mujeres que llegan y las que hacen parte de la propuesta sean capaces de **emprender** y de generar formas de **resistencia** de una manera pensada y crí-

“Para las mujeres, la seguridad es entendida como un derecho de los pueblos y un deber de los Estados hacia sus conciudadanos, desde la perspectiva del disfrute integral de los derechos económicos, sociales, culturales y colectivos”

“La mujer, muy particularmente, se aferra al lugar ya que históricamente es la primera que construye su maloka, un espacio territorial para producir”

tica, sobre el principio de la exigibilidad de sus derechos humanos y de que no es suficiente resolver las mínimas condiciones, sino que además hay que exigir vivir en condiciones dignas.

Formas de hacer Resistencia y Memoria desde la OFP

La resistencia es una postura política de lucha por la exigibilidad de los derechos de todas las comunidades afectadas. En un contexto tan difícil, donde cotidianamente las mujeres se ven enfrentadas a situaciones arbitrarias de atropellos a la vida, a las libertades ciudadanas y a los abusos de poder, a estas personas se les crean a diario retos, para transformar el miedo y la muerte en vida; para multiplicar la esperanza y no declinar en la construcción de sus sueños de vida digna. De esta forma las mujeres generan respuestas creativas, coherentes y políticas.

Así, desde la denuncia y la divulgación de las violaciones a los derechos humanos y desde los programas orientados a la reconstrucción del tejido social para que germine la vida en las grietas que ha dejado la guerra, la OFP cuenta con diferentes iniciativas, como, por ejemplo, las llamadas Vivienda Digna, Autonomía Alimentaria, Salud Integral, Área de Organización, Trabajo con Jóvenes, Atención Jurídica y Formación e Investigación. Todos estos proyectos se llevan a cabo desde el Movimiento Social de Mujeres en Contra de la Guerra.

Éstas son sólo algunas de las herramientas con las que la OFP, desde su creatividad de mujeres populares decididas a inventarse la vida, le hacen frente a la imposición de la impunidad y se resisten a abrirle el paso al olvido y a la muerte.

Este grupo de mujeres recurre diariamente también a lo simbólico y a lo cultural para alimentar un imaginario de resistencia cargado de creatividad y para abrir posibilidades de expresión más allá de las palabras.

Símbolos

Estas mujeres de las que hablamos visten batas negras en actos públicos y realizan marchas vestidas de negro como símbolo de fortaleza ante el dolor. Otra expresión de resistencia contra la explotación, la injusticia y la represión, es la formación de una gran cadena a la que dan forma las mujeres, tomadas de la mano. Así hacen visible y denuncian la situación que sufren en Colombia, la creciente feminización de la pobreza y los efectos del conflicto armado.

Realizan también marchas con ollas vacías, elevando su voz de protesta para denunciar el olvido por parte del Estado colombiano y la negación de los derechos económicos, sociales, culturales y colectivos.

Por otro lado, crean formas de hacer memoria, realizan la Conmemoración de Eventos -en fechas marcadas, para no olvidar sucesos importantes-, no sólo para recordar desde el dolor, sino como forma de resignificación del dolor y para recomponerse y emprender nuevas formas de acción; también para aprehender la exigibilidad de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

Se han erigido lugares de representación histórica y política como una forma de resignificar simbólicamente el dolor, como el Parque Camilo Torres Restrepo, el Parque de la Vida o el Centro de Investigación y Documentación María Cano.

Como ejemplo de resignificación del dolor cabe señalar la Isla de los Ensueños. El río, para sus pobladores, es sinónimo de vida, de alimento y de articulación y relación con los amigos y los vecinos. Sin embargo, por la acción de las masacres el río llegó a convertirse en la vertiente de la muerte. Por el río llega la represión y los cadáveres. En una iniciativa por recuperar el antiguo sentido del río, las mujeres han tomado la vertiente en un gran recorrido festivo y cultural para recuperar la alegría y, desde distintas expresiones, para recordar la verdadera historia del movimiento social y político de la región, a los líderes y líderes ausentes y la importancia de continuar defendiendo el territorio, la cultura, la vida y lo público.

En un trabajo orientado a recrear la oralidad, en espacios abiertos y junto a la comunidad, las mujeres, los jóvenes, las niñas y los niños realizan actividades culturales, relatan cuentos e historias, participan en concursos de escritura y se celebran encuentros juveniles. Todo ello se hace para recuperar la verdadera historia y la cultura de la región.



Como una expresión manual y artística de la afectación de la guerra, las mujeres han creado la Manta Global de la Solidaridad. Esta expresión simboliza la solidaridad de las mujeres, su acción afirmativa y su compromiso en la construcción de otro mundo igualitario, solidario, justo, libre y en paz.

Realizan Peregrinaciones o recorridos por todos los sectores para recuperar la memoria y recordar a las víctimas los diferentes sucesos violentos ocurridos en la región.

Por los barrios donde se presume que han ocurrido las desapariciones, las mujeres, en marcha con los familiares de las víctimas, perifonean los nombres de los desaparecidos e invitan a los habitantes a participar, sensibilizándolos y motivándolos a denunciar.

Incluso se han hecho recopilaciones de todos los símbolos utilizados en diferentes momentos a lo largo de nuestra historia, como la titulada *Gotas para la resistencia, campañas contra el miedo -hacerle al amor al miedo-*. Conceptos como las cadenas, trenzas, manos, flores, llaves o el fuego se convierten en símbolos de vida, esperanza y resistencia.

PROPUESTAS

Se hace necesaria la aplicación de acciones encaminadas a crear una política pública para atender la problemática del desplazamiento y que articule el resarcimiento de los daños causados y la devolución de las tierras; pero necesariamente debe tener efectos retroactivos.

Como el problema mayor radica en la concentración de recursos territoriales y de poder político³, se hace necesaria una verdadera reforma agraria, entendida ésta como un real modelo de desarrollo rural, que democratice el campo pero que contenga la perspectiva de las mujeres.

“La resistencia es una postura política de lucha por la exigibilidad de los derechos de todas las comunidades afectadas”

También adquiere una especial importancia diseñar acciones efectivas que garanticen a las mujeres en situación de desplazamiento el derecho a la verdad, la justicia y la reparación por las violaciones a las que han sido sometidas, sobretudo en el actual proceso de negociación con los grupos paramilitares

Por otro lado, se debe buscar la mirada de los organismos internacionales que trabajan por los derechos humanos para exigir al Estado colombiano el cumplimiento de los pactos internacionales firmados para proteger a las mujeres y a las comunidades y para conseguir el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de las poblaciones y el cumplimiento de las recomendaciones que estos mismos organismos le han hecho al Estado colombiano en repetidas ocasiones.

Martha Elena Giraldo

Representante de la Ruta Pacífica de las Mujeres

Ruta pacífica de las mujeres colombianas Mujeres en resistencia: por una vida digna

En este espacio de las jornadas, que corresponde al apartado ‘Vida de las comunidades desplazadas/confinadas: situación y alternativas’, he decidido hablar precisamente de este último tema, puesto que la Ruta Pacífica de las Mujeres Colombianas, a quienes represento, dedica gran parte de su lucha a promover y proveer a la población colombiana de herramientas pacifistas como una alternativa de la lucha contra la guerra. La Ruta Pacífica es una expresión del Movimiento Social de Mujeres en Colombia por una salida negociada al conflicto armado, compuesta por 350 organizaciones de mujeres que surgimos públicamente en 1996 ante la grave situación de violencia en la que se encuentran las mujeres en las zonas de conflicto armado, tanto rural como urbano. Violencias que han sido invisibilizadas y subvaloradas.

Ayer noche resolví cambiar mi conversación sobre los impactos del desplazamiento en la vida de las mujeres para hablar sobre las alternativas porque pienso en lo importante que es hacernos conocer ante ustedes como organizaciones sociales, no solamente como víctimas de un proceso antidemocrático del que seguramente oirán hablar con suficiencia en estos días. Por eso prefiero hablar de las apuestas sociales de los diversos movimientos colombianos contra todo este estado de malestar.

Lo alternativo está demasiado cerca de la creación, la recreación, la esperanza activa y, en nuestras organizaciones sociales, de la construcción de formas alternativas, del lenguaje, del trabajo productivo, de las relaciones sociales, de la interacción política. Así, estos aspectos se han ido convirtiendo en símbolos y en **herramientas de nuestra resistencia pacífica**, enri-

queciendo nuestro propósito político y alternativo contra la guerra.

En muchos textos encontramos como primera acepción de la palabra resistencia: ‘Acción y efecto de resistir’. A renglón seguido menciona que es ‘la acción que ejercen los habitantes de un territorio ocupado por medio de acciones no violentas y evitando el enfrentamiento con el ocupante’. También la definen como ‘la acción de oponerse un cuerpo o una fuerza a la acción de otra, rechazando, contradiciendo, tolerando, durando, sobreviviendo’.

Los principios y la fuerza de nuestras convicciones políticas nos han brindado los elementos suficientes para hacer posible que invitemos a las mujeres y hombres de Colombia a resistir, pero desde el conocimiento de su contexto y desde el reconocimiento de sus tradiciones y el de sus ancestros. También desde el nuevo encuentro de lo que inconscientemente hemos dejado ir, pero que estamos recuperando concientemente porque lo sentimos nuestro y porque nos hace más soberanos.

“Nuestras estrategias de resistencia se mueven y se preguntan sobre la necesidad que se dé una apropiación ciudadana del Derecho Humanitario y del Derecho Internacional Humanitario para erradicar el sufrimiento de la población civil”

3. De acuerdo con el Informe de la Conferencia Episcopal y COHES. (Febrero 2006). En Colombia, 4.8 millones de hectáreas de tierras han sido abandonadas por efecto del conflicto armado interno entre el año 1995 y el año 2005.



“Así, estos aspectos se han ido convirtiendo en símbolos y en herramientas de nuestra resistencia pacífica, enriqueciendo nuestro propósito político y alternativo contra la guerra”

Nuestras estrategias de resistencia se basan en el pacifismo como **herramienta de construcción de un escenario nuevo de reconciliación** incluyente, que promueve puentes de acercamiento y de búsqueda permanente de la paz.

Nuestras estrategias de resistencia, basadas en el feminismo como plataforma política, nos **permiten la decostrucción de todas las formas de exclusión y el avance contra la injusticia social** que, en última instancia, es la llama que mantiene encendido el conflicto armado.

Nuestras estrategias de resistencia se mueven y se preguntan sobre la necesidad que se dé una apropiación ciudadana del Derecho Humanitario y del Derecho Internacional Humanitario para erradicar el sufrimiento de la población civil, que se encuentra en medio de las desapariciones forzadas, las ejecuciones sumarias, la militarización de la vida civil y la utilización de las mujeres como botín de guerra.

Nuestras estrategias de resistencia trabajan la incidencia política en lo nacional y lo internacional.

Nuestra actuación comporta una intervención participativa y feminista, unida al pacifismo, y de carácter nacional, que busca:

- *Producir resultados en la esfera de la vida pública y privada.*
- *Incidir políticamente a través del advocacy y del cabildeo en las instituciones públicas y en las organizaciones sociales y políticas.*
- *Relacionar los ámbitos locales, nacionales e internacionales.*
- *Producir conocimiento cualificado para respaldar las propuestas del Movimiento de Mujeres Contra la Guerra y de la sociedad civil.*

· *Establecer relaciones y alianzas con organizaciones de mujeres y mixtas de derechos humanos y de paz de carácter nacional e internacional.*

A TRAVÉS DE NUESTROS PROGRAMAS

- *De presión política.*
- *De formación para la paz.*
- *De comunicaciones.*

¿QUÉ HAN LOGRADO EN ESTOS 10 AÑOS?

- *Generar opinión de la sociedad civil contra la guerra.*
- *Construir nuevos imaginarios colectivos entorno a un escenario de paz posible a través del lenguaje y de las acciones de rechazo a la guerra.*
- *Construir procesos colectivos donde la verdad, la justicia y la reparación se reconozcan como acciones de voluntad política y no como acciones de buena voluntad.*
- *Reconstruir la acción popular hacia el ejercicio pleno de la ciudadanía, que permita hacer las paces.*

Nuestra estrategia de resistencia viene acompañada de todas las sinergias de hombres y mujeres de todo el mundo que, como nosotras y como ustedes, tienen una posición contra la guerra y cuyos instrumentos no son comunes para la protección, defensa y exigibilidad de nuestros derechos, pero sí son afines a la búsqueda del bienestar con justicia social y a la vida con dignidad.

Resistir, pues, no consiste en demostrar fuerza, sino en fortalecer para la cohesión social.

- *Resistir ha dado como respuesta al acoso insurgente, paramilitar y militar que la comunidad define simbólicamente territorios de paz en escuelas, en barrios, en ONGs, en oficinas y en comunidades frente a la propuesta de un país totalmente en guerra entre los que están con el Estado contra los que no están con él.*
- *Resistir nos ha permitido reactivar las tradiciones de intercambio, de trueque y de trabajo en minga, que nos permiten, de paso, reconstruir escuelas y puestos de salud vencidos por los guerreros. Nos aportan también el placer del almuerzo de olla comunitario, de las confianzas y de la solidaridad, en contra de la propuesta de seguridad democrática, basada en la delación y la desconfianza.*

· *Resistir nos ha permitido reafirmar nuestra soberanía territorial y alimentaria a través de la recuperación de las actividades domésticas de producción y de las relaciones primarias sin intermediación; de volver a creer en la palabra, en contra de la propuesta de venta y uso de nuestros territorios a los mejores postores y la confinación de nuestras vidas por los macroproyectos.*

Podría seguir dando ejemplos del significado que tiene la palabra resistir en nuestra sociedad golpeada por la violencia. Ésta, en medio de una gran crisis humanitaria, de la lucha por el control de sus territorios y de la militarización de la vida civil lucha pacífica, política y militante (ha sido difícil para mí encontrar una palabra menos guerrera) por hacer de la cohesión social un instrumento de Paz y de Dignidad. Todo ello, estando en medio de la guerra, de la mentira, de la desinformación y de un conflicto social y armado disfrazado de guerra de soldados de plomo que obedecen a un tambor mayor.

“Los principios y la fuerza de nuestras convicciones políticas nos han brindado los elementos suficientes para hacer posible que invitemos a las mujeres y hombres de Colombia a resistir”